



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**  
**Magistrada Ponente**

**REFERENCIA:** PROCESO ORDINARIO LABORAL – **SENTENCIA**  
**RADICACIÓN:** 05 001 31 05 **008 2021 00235 01**  
**DEMANDANTE:** YOLANDA MARÍA BETANCOURT DE UPEGUI  
**DEMANDADO:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –  
COLPENSIONES y JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN  
DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA

Medellín, veintitrés (23) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, respecto de la sentencia absolutoria proferida el 19 de mayo de 2022, por el Juzgado 8° Laboral del Circuito de Medellín.

**I. ANTECEDENTES**

Pretende la demandante que se deje sin efectos jurídicos la fecha de estructuración establecida en el dictamen n.º 081758-2019 emitido el 30 de mayo de 2019 por la JRCI de Antioquia y en su lugar, se acoja el concepto rendido el 29 de octubre de 2020 por el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; en consecuencia se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la sustitución de la pensión de invalidez *post mortem* reconocida a su hermana María Isabel Betancur [sic] Estrada (QEPD), junto con las mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación (pág. 7 arch. 1 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que nació el 16 de mayo de 1939 y es hermana de María Isabel Betancur [sic] Estrada (QEPD) dado que son hijas de Jaime Betancourt y Ligia Estrada, quienes fallecieron en 1983 y 2003, respectivamente; se casó con Alfonso Upegui Ortiz, quien murió, motivo por el cual el extinto ISS mediante Resolución n.º. 02427 del 11 de mayo de 1989 le reconoció la pensión de sobrevivientes en cuantía de \$32.560, es decir, 1 SMLMV de la época.

Adujo que su hermana María Isabel era soltera, no tenía hijos y fue calificada por Colpensiones con una PCL de 62.59% estructurada al 5 de junio de 2013; el 3 de julio de 2014 su hermana extendió su testamento mediante EP n.º 1163 protocolizada en la Notaría 1ª del Círculo de Itagüí, Antioquia, dejándole todos sus bienes e inmuebles; su hermana siempre mantuvo su capacidad económica dado que fue docente del Instituto Tecnológico de Antioquia cuya remuneración era de \$3.080.000, la EPS Sura le cubrió las incapacidades que le otorgaron entre mayo y diciembre de 2013, el fondo mutual de Coomeva le giró auxilios de incapacidad entre julio de 2013 y febrero de 2014, Colpensiones le reconoció incapacidades del 22 de abril al 21 de mayo de 2014 y conforme la póliza que contrató con Chubb Seguros Colombia SA, le fue desembolsado \$14.522.200 el 4 de julio de 2013.

Agregó que su hermana María Isabel falleció el 6 de julio de 2014 y Colpensiones mediante Resolución SUB70218 del 21 de marzo de 2019, le reconoció la pensión de invalidez *post mortem* en cuantía de \$2.761.433; con ocasión del mencionado testamento, el Instituto Tecnológico de Antioquia la reconoció como heredera de su hermana y le pagó \$4.176.846 por concepto de prestaciones sociales proporcionales adeudadas a su difunta hermana; además, la adjudicación de bienes de su hermana se efectuó en EP n.º 532 del 18 de marzo de 2015, motivo por el cual le correspondió como heredera un total de \$2.000.000.

Indicó que cuando contaba con 66 años de edad en el año 2006 se le implantó una prótesis en la rodilla izquierda, luego sufrió una trombosis arterial en la misma pierna, requiriendo un filtro en la vena cava; en el año 2007 tuvo un infarto cerebral que le generó la pérdida de la movilidad para realizar las tareas del hogar y ello la llevó a depender económicamente de su hermana María Isabel hasta el día en que falleció, pues además de que ella le

brindaba dinero para ayudarle con el pago de los servicios públicos, la medicina prepagada de Coomeva, el transporte en taxi a las citas médicas y cubrir los medicamentos no suministrados por la EPS, le pagaba los servicios a Sor Belén Barrera Zapata, contratada desde febrero de 2008 y a Ana de Dios Bustamante Ceballos, contratada desde enero de 2012, quienes fungen como empleadas domésticas de su hogar, con la advertencia de que la última persona fue vinculada debido a las complicaciones oncológicas y de diabetes de su hermana hoy fallecida, pues debido a ello, tuvo que pasar largas temporadas en su casa.

Informó que la ayuda de su hermana María Isabel era determinante para su digna subsistencia, en la medida en que la pensión de sobrevivientes que devengaba por parte de su esposo no le alcanzaba para solventar los gastos ya mencionados que, a la fecha del fallecimiento de su hermana eran aproximadamente \$1.495.909, mientras que la cuantía de su pensión ascendía a \$616.000.

Por tal motivo, el 30 de mayo de 2019 fue valorada por la JRCI de Antioquia, quien mediante el reseñado dictamen estableció que su PCL es del 52.61% con fecha de estructuración al 1º de febrero de 2015, sin embargo, como tal pericia adolece de imprecisiones acudió al Laboratorio de Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, ente que en concepto del 29 de octubre de 2020 estableció que su PCL es del 51.97% pero con fecha de estructuración al 20 de junio de 2014, porque ya contaba para esa data con 75 años de edad y padecía de diversos diagnósticos que ostentan el rango de enfermedades crónicas, incurables y cuya evolución ha sido de varios años atrás. Así que con este último dictamen solicitó el 25 de noviembre de 2020 ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, junto con los intereses moratorios y/o indexación, con ocasión del fallecimiento de su hermana inválida, petición que fue negada mediante Resolución SUB28843 del 8 de febrero de 2021 (págs. 4-7 arch. 1 C01).

## **II. TRÁMITE PROCESAL**

Previo subsanación la demanda fue admitida mediante auto del 25 de junio de 2021 ordenándose la notificación y traslado a las demandadas, decisión que fue corregida en providencia del 12 de julio siguiente en cuanto al apellido de la demandante (archs. 5 C01).

La JRCI de Antioquia contestó con oposición porque su dictamen se ciñó estrictamente a lo dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez, con sustento en los antecedentes médicos y clínicos aportados; propuso como excepción las denominadas el dictamen de la JRCI es plenamente válido, la determinación de la PCL y la fecha de estructuración están ajustadas a derecho (Decreto 1507 de 2014), inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, buena fe de la JRCI y de ello se deriva la imposibilidad de condena en costas, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar, ausencia de causa para pedir (archs 8, 18 C01).

Colpensiones contestó oponiéndose a lo pretendido bajo el argumento de que la demandante debe demostrar la dependencia económica respecto de su hermana fallecida, aunado a que el dictamen de la Universidad de Antioquia no es idóneo de conformidad con el art. 54 del Decreto 1352 de 2013 para tramitar la solicitud de reconocimiento pensional ante Colpensiones, motivo por el que le fue negada la prestación a la demandante. Propuso como excepciones las denominadas improcedencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de invalidez *post mortem* reconocida a la causante, inexistencia de la obligación de reconocer mesadas adicionales de junio y diciembre e intereses de mora del art. 141 de la Ley 100 de 1993, imposibilidad de condena simultánea de pagar réditos e indexación, buena fe, imposibilidad de condena en costas, compensación y prescripción (archs. 12, 18 C01).

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio a pesar de haber sido enterada de la existencia del presente proceso (arch. 23 C01).

### **III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 19 de mayo de 2022, absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a cargo de la demandante, tras considerar que si bien el problema jurídico radica en establecer si es procedente dejar sin efectos jurídicos la fecha de estructuración fijada en el dictamen de la JRCI de Antioquia, para en su lugar acoger el dictamen emitido por la Universidad de Antioquia, y como consecuencia de ello, reconocer la sustitución pensional perseguida por la demandante con ocasión del fallecimiento de su hermana

pensionada por invalidez, inició por desarrollar lo atinente a la calidad de beneficiaria que predica la actora de la prestación solicitada conforme los arts. 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, para concluir con base en el material probatorio recaudado que, no se acreditó la dependencia económica real y efectiva respecto de la causante, porque no se demostró que la ayuda financiera que le brindó la hermana fallecida fuera de tal relevancia en la vida de la demandante, aunado a que las pruebas testimoniales fueron contradictorias, de ahí que no sea acreedora de la sustitución pensional (archs. 35, 36 C01).

#### IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencia del 7 de septiembre de 2022 se admitió el grado jurisdiccional de consulta y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar en auto del 21 de noviembre siguiente, sin embargo, las partes guardaron silencio (archs. 2, 3 C02).

Mediante auto del 31 de mayo de 2023 se ordenó en forma oficiosa que la Universidad CES efectúe un dictamen relacionado con la PCL de la demandante, fecha de estructuración y origen de la misma, el cual fue proferido el 5 de febrero de 2024 y puesto en conocimiento de las partes en providencia del día 27 del mismo mes y año, sin que hubieran manifestado algo al respecto (archs. 4, 22, 23 C02).

#### V. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, y de conformidad con lo previsto en el art. 69 del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar en estricto orden y por cuestiones de método: **i)** si hay lugar a declarar la nulidad del dictamen n.º 081758-2019 emitido el 30 de mayo de 2019 por la JRCI de Antioquia, para así modificar la fecha de estructuración de la PCL de Yolanda María Betancourt de Upegui y fijarla a 20 de junio de 2014; **ii)** si resulta loable otorgar la sustitución de la pensión de invalidez *post mortem* reconocida a su hermana María Isabel Betancur [sic] Estrada (QEPD), en los términos aducidos en la demanda.

Lo anterior, por cuanto así se plantearon las pretensiones desde el libelo introductor y se fijó el litigio en la audiencia del art. 77 del CPTSS celebrada el 8 de septiembre de 2021 (archs. 26, 27 C01), decisión respecto de la cual no hubo reparo alguno de las partes; de ahí que incurrió en yerro la *a quo* al desarrollar los problemas jurídicos planteados en la sentencia consultada en la forma en que lo hizo, dado que como se verá más adelante, al tenor de lo dispuesto en el lit. e) del art. 47 de la Ley 100 de 1993, es necesario en primer lugar, para verificar la calidad de beneficiaria, en este caso, de Yolanda María Betancourt de Upegui, establecer su condición de hermana inválida de la causante, y luego sí, su dependencia económica respecto de María Isabel Betancur [sic] Estrada (QEPD) para la data del deceso de esta última; pero para ello, a pesar de que no se discute lo atinente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que padece la demandante, sí es necesario analizar en forma principal lo atinente a la modificación de la fecha de estructuración de la invalidez que fue fijada por la JRCI de Antioquia, con base en el dictamen rendido por el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, para lo cual se trae a colación lo establecido en sentencia CSJ SL 10 jun. 2008 rad. 30720.

Así las cosas, para iniciar ha de indicarse que no fue discutido y se encuentra plenamente acreditado que: **i)** Yolanda María Betancourt de Upegui nació el 16 de mayo de 1939 por lo que en la actualidad cuenta con 84 años de edad y no ha efectuado cotizaciones al sistema (págs. 12, 13, 16 archs. 1, 15, subcarp. 17 C01); **ii)** la causante María Isabel Betancur [sic] Estrada nació el 25 de octubre de 1960 y falleció a sus 53 años de edad, el 6 de julio de 2014 (págs.. 14, 15, 17, 28, 29 arch. 1 subcarp. 17 C01); **iii)** ambas son hijas de Ligia Estrada de Betancourt y Jaime Betancourt Arango (págs. 18-20 arch 1 C01); **iv)** el 30 de mayo de 2019 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia expidió el dictamen n° 081758-2019 en donde se estableció que la demandante tenía un 52.61% de PCL estructurada al 1° de febrero de 2015, por enfermedad de origen común (págs. 218-223 arch. 1 C01); **v)** el 25 de noviembre de 2020 Yolanda María solicitó la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de su hermana pensionada por invalidez, la cual fue negada mediante resolución SUB28843 del 8 de febrero de 2021, por considerar que el dictamen proferido por la Universidad de Antioquia y aportado en vía administrativa, no es idóneo para tramitar la solicitud de reconocimiento pensional, de conformidad con el art. 54 del Decreto 1352 de 2013 (págs.. 235-240 arch. 1, subcarp. 17 C01).

**Modificación de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional de la demandante.-** El mencionado dictamen n° 081758-2019 fue proferido por la JRCI de Antioquia debido a la solicitud elevada por la demandante el 16 de mayo de 2019 como usuaria particular y con el fin de lograr la sustitución pensional de su hermana; del mismo se observa que se evaluaron los diagnósticos E119 *diabetes mellitus no insulínica dependiente sin mención de complicación*, J439 *enfisema no especificado*, M17.0 *gonartrosis primaria bilateral*, I10X *hipertensión esencial primaria* y M511 *trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía*; así mismo, que la fecha de estructuración allí impuesta frente a tales diagnósticos estuvo relacionada con la tomografía axial computarizada de alta resolución (TACAR) que informa el compromiso de las vías aéreas, sin que en concepto del grupo médico interdisciplinario, alguno de estos padecimientos aplique para ser considerado como enfermedades degenerativas, progresivas, ni de alto costo o catastróficas (págs. 218-223 arch. 1 C01).

Como lo que se pretende es modificar la fecha de estructuración de la invalidez de la demandante que estableció la JRCI de Antioquia en el citado dictamen, según lo adoctrinado por el Máximo Órgano de Cierre de la especialidad laboral, en concordancia con lo dispuesto en el art. 3° del Decreto 1507 de 2014, vigente para la época de calificación de la actora, tal concepto se entiende como la data en que se genera en la persona una pérdida en su capacidad laboral en forma **permanente y definitiva**, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos, es decir, tal data debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el 50% de pérdida de la capacidad laboral, con soporte en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la calificación en la que se declara la pérdida de la capacidad laboral, siendo ello debidamente argumentado por el calificador y consignado en la respectiva calificación, sin que esté sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral (CSJ SL4178-2020).

Lo anterior, bajo el entendimiento de que las secuelas hacen referencia a las alteraciones estructurales y/o funcionales de orden físico o psicológico de carácter permanente, que quedan tras el intento infructuoso de tratamientos médicos, farmacológicos y terapéuticos, para la curación de una enfermedad o

de un traumatismo y son consecuencia de estos, pues ya no hay posibilidad de que exista una mejoría en tales patologías o diagnósticos del afiliado, de ahí que deban ser tenidas en cuenta por el ente calificador para ponderar el porcentaje de PCL, con la norma vigente a la fecha en que la persona perdió en forma definitiva su capacidad laboral; por ende, la data de estructuración de la invalidez **no siempre** coincide con la de la ocurrencia de un accidente o del diagnóstico de la enfermedad, toda vez que puede suceder que sus secuelas se manifiesten de manera posterior, o existan enfermedades congénitas o aquellas calificadas como crónicas o degenerativas, y solo a partir de cuando los tratamientos no coadyuvan en absoluto a la mejoría del paciente es que se estructura la invalidez por cuanto el afiliado ya no continúa con capacidad para desarrollar un determinado rol o trabajo (CSJ SL4178-2020, CSJ SL366-2019).

Así las cosas, se tiene que, para establecer la viabilidad de la modificación en la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad de la demandante, esta aportó con su demanda, una pericia rendida el 20 de octubre de 2020 por la Médica Especialista en Salud Ocupacional, Dra Martha Lucía Escobar Pérez, como integrante del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en la que tras evaluar los mismos diagnósticos que tuvo en cuenta la JRCI de Antioquia<sup>1</sup>, disminuyó el porcentaje de PCL a 51.97% y modificó la fecha de estructuración de la enfermedad de origen común al 20 de junio de 2014, con la advertencia de que es de carácter crónico pues *«no hay curación de su condición»*, ya que *«todos los diagnósticos, (...) se establecieron antes del año 2014, año en el que además contaba con 75 años de edad, lo que de por sí la hace persona vulnerable por su condición de adulta mayor»*, además se enfatizó en que la revisión de la historia clínica de la paciente se hizo *«hasta el año 2014, para definir si antes de julio de ese año, la señora Yolanda tenía la condición de inválida de acuerdo con la normatividad»*, y en que se efectuó el dictamen únicamente con evidencia documental, dado que para la época, la entidad había suspendido la atención al público ante la coyuntura de la pandemia por la COVID-19 (págs.. 224-231 arch. 1 C01).

A su turno, esta Colegiatura ordenó en forma oficiosa practicar un nuevo dictamen por parte de la Universidad CES, el cual fue rendido el 5 de febrero de

---

<sup>1</sup> E119 diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación, J439 enfisema no especificado, M17.0 gonartrosis primaria bilateral, I10X hipertensión esencial primaria y M511 trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía.



2024, en el que se le asignó a la demandante una PCL de 52.24% por enfermedad de origen común con fecha de estructuración al 20 de junio de 2014, que coincide con la primera fecha en que fue atendida la paciente por medicina interna y ya había presentado trombosis venosa profunda (TVP); allí se evaluaron los diagnósticos E119 *diabetes mellitus no insulínica dependiente sin mención de complicación*, M178 *gonartrosis primaria bilateral*, I10X *hipertensión esencial primaria*, M511 *trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía*, G473 *apnea del sueño* y J449 *enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada*. (págs.. 3-11 arch. 22 C02).

Lo primero por decir, es que la Galena Martha Lucía Escobar Pérez explicó ampliamente y ratificó su dictamen en audiencia celebrada el 19 de mayo de 2022, en el sentido de indicar que lo profirió básicamente para responder la pregunta efectuada por la demandante como usuaria particular del sistema, relativa a la fecha de estructuración de la invalidez y que si para el año 2014 era inválida, por lo que concluyó que si bien la JRCI estructuró la PCL en el año 2015, lo cierto es que la demandante tiene unas patologías crónicas que no aparecen de un día para otro, dado que no son consecuencia de un acto súbito, sino que además de ser varias, son progresivas y lentas.

Aclaró que no estudió la historia clínica actualizada a la fecha del dictamen, sino solo hasta el año 2014, dado que en el 2015 habría existido más severidad en las lesiones, por ende analizó la situación médica de la demandante hasta el año 2014, de ahí que el porcentaje de PCL en todo caso le hubiera arrojado uno superior al 50%, pero disminuido a 51.97% con respecto al indicado por la JRCI de Antioquia con base en el TACAR practicado en el año 2015, aunado a que ella tuvo en cuenta la edad de 75 años que tenía la demandante para el 2014, que hace que, debido a las patologías crónicas degenerativas y complejas que padece, su condición de adulta mayor se vea muy diezmada y tenga serias dificultades (archs. 34, 36 C01).

De esta manera, lo manifestado por la perito no resulta descabellado, en la medida en que el CENDES argumentó en el dictamen del 5 de febrero de 2024 que la demandante tiene antecedentes de larga data de hipertensión arterial, diabetes mellitus no insulínica dependiente, varios infartos cerebrales y artrosis a nivel de ambas rodillas, por lo cual requirió cirugía para prótesis de rodilla izquierda en el año 2006 y este mismo tratamiento quirúrgico en la

rodilla derecha para el 2014, lo que según lo allí explicado, le generó pérdida de movilidad, limitándola para realizar las tareas del hogar.

Si se revisa la historia clínica aportada con la demanda (págs.. 74-127 arch. 1 C01) y los resúmenes efectuados en los 3 dictámenes a los que se ha hecho referencia, en efecto, se constata que la demandante a sus 67 años de edad, el 24 de julio de 2006 le implantaron una prótesis en su rodilla izquierda y 3 de agosto de 2006 consultó por urgencias debido a una trombosis venosa profunda de su miembro inferior izquierdo, tenía hipertensión arterial (HTS), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), artrosis en la rodilla izquierda y colon irritable, lo que conllevó a que el 22 de agosto siguiente, se le colocara sin complicación alguna, un filtro de vena cava con cavografía, por cuanto que había presentado sangrado digestivo inferior por anticoagulación medicada; entre los años 2007 a 2012 presentó cambios de leucoencefalopatía microangiopática, episodios de pérdida de conciencia, prominencia de los surcos corticales y sistema ventricular con relación a cambios involutivos y convulsiones.

Desde el año 2011 a través de doppler venoso efectuado el 11 de mayo y el 16 de diciembre, se observó que la demandante a sus 72 años de edad, tenía una trombosis aguda de las venas tibiales posteriores de la pierna derecha e insuficiencia venosa superficial bilateral; para el 18 de febrero de 2014 a través de ortopedia se encontró que la paciente a sus 75 años de edad, presentó en su rodilla derecha artrosis compartimental más severa en el compartimento medial, por ende, tenía limitación funcional, deformidad en varo, caminaba menos de una cuadra y usaba bastón, así que se le recomendó la realización de una cirugía para implantarle también una *«prótesis total de la rodilla derecha previa evaluación por cirujano vascular y por hematólogo y o internista»*.

La valoración por el médico internista fue realizada el 20 de junio de 2014 y es allí en donde se confirma la realización del mencionado procedimiento quirúrgico pues el especialista encontró que la paciente sufría dolor en la pierna derecha, tenía edema, sensación de fiebre e impotencia funcional y se le recetaron medicamentos para sus patologías, con lo cual se podría incluso señalar que hasta ese punto la demandante logró su mejoría médica máxima (MMM), pues a pesar de los tratamientos y medicina prescritos en oportunidades anteriores, tal procedimiento quirúrgico sería lo que aparentemente le mejoraría un poco su calidad de vida, forma de caminar y neuralgia presentada.

Lo anterior, dado que a sus 75 años de edad ya tenía también prótesis en la otra rodilla y ello, claramente le disminuiría aún más su movilidad y estabilidad, y le implicaría más cambios degenerativos en su columna lumbar, teniendo en cuenta que debido a su edad podría ser difícil su recuperación posquirúrgica pues de usar bastón, como atrás se vio, pasó a requerir caminador para su marcha desde inicios del año 2019 a sus 79 años, sin contar por supuesto, con los demás padecimientos con los que ya contaba para la época en que se estructura en esta providencia la PCL, en especial los cerebrales que, incluso, como se puede observar en la historia clínica, a pesar de los medicamentos, fueron evolucionando con el paso de los años en detrimento de su salud, porque en el año 2016 seguía presentando convulsiones y problemas de memoria, en el 2017 ya mostró enfermedad microvascular y plexopatía y en el 2018 ataxia.

Así las cosas, considera la Sala que no era posible establecer la fecha de estructuración de la invalidez a 1º de febrero de 2015 como consecuencia de la tomografía axial computarizada de alta resolución (TACAR), según lo concluido por la JRCI de Antioquia, porque este escáner solo mostraba lo atinente al compromiso médico con el que contaba la demandante en sus vías aéreas, es decir, lo relativo a su respiración y pulmones que, claramente resulta también importante porque concierne a uno de los diagnósticos que han venido siendo valorados, pero que como se vio, desde antes de esa fecha, la paciente sufría de padecimientos más relevantes que mermaron su capacidad laboral debido a la notable disminución en su movilidad y estabilidad por las prótesis implantadas en tan importantes articulaciones como lo son ambas rodillas, lo que ocasionaba que no pudiera caminar más de media cuadra, ni subir o bajar escaleras, no lograba quedarse de pie sin sostenerse y se debía bañar en posición sedente, necesitando ayuda para vestir su tronco inferior.

De esta manera, con el material probatorio aportado, al tenor de lo dispuesto en los arts. 61 del CPTSS y 232 del CGP, se desprenden criterios objetivos claros que sustentan palmariamente la motivación que tuvo tanto Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, como el CENDES, para establecer que la fecha de estructuración de la invalidez era anterior al año 2015, por tal motivo, como se ajustan a lo documentado en la historia clínica allegada al plenario y a las disposiciones del Decreto 1507 de 2014, le brindan a la Sala todos los elementos de juicio que le aportan la

convicción del estado de salud de la demandante, siendo entonces posible modificar tal data en la forma peticionada en la demanda, máxime cuando ambas entidades calificadoras, a través de instrumentos técnicos adecuados, lograron establecer que en efecto para el 20 de junio de 2014, Yolanda María a sus 75 años de edad y debido a las múltiples dolencias que le han venido aquejando desde incluso unos 8 años aproximadamente hacía atrás de esa fecha y las prótesis de ambas rodillas, contaba con más del 50% de pérdida de su capacidad laboral, lo que al tenor del art. 38 de la Ley 100 de 1993 permite que sea considerada una persona en situación de discapacidad y así se **declarará, revocando parcialmente** el numeral **primero** de la sentencia consultada en este aspecto.

**Pensión de sobrevivientes.-** Como principio general, la norma aplicable para resolver la procedencia de este derecho pensional, es la vigente al momento del fallecimiento del pensionado o afiliado (CSJ SL17521-2016, CSJ SL15873-2017, CSJ SL1362-2019, CSJ SL3348 - 2021, CSJ SL4958-2021 y CSJ SL2538 de 2021 entre otras).

En el caso que nos ocupa, se tiene que como el deceso de la causante María Isabel Betancur [sic] Estrada ocurrió el 6 de julio de 2014 (págs.. 14, 15, 17, 28, 29 arch. 1 subcarp. 17 C01), la normativa aplicable son los arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los arts. 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, según los cuales, para el caso, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca, y se reputan beneficiarios de la prestación, en forma vitalicia, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

Aquí no fue objeto de discusión que el 13 de junio de 2014 María Isabel solicitó a Colpensiones la pensión de invalidez, la cual se reconoció con posterioridad a su deceso mediante Resolución SUB70218 del 21 de marzo de 2019 fijando como «*valor mesada año 2019=\$2.761.433*», sin que se hubiera evidenciado por parte de la entidad solicitud de pago a herederos con la precisión de «*que este trámite es inherente a nómina y debe ser radicado en un Punto de Atención Colpensiones (PAC)*», empero posteriormente el 11 de marzo de 2021 la entidad emitió la Resolución SUB63502 mediante la cual dispuso el pago único a herederos de \$3.295.190 por concepto de mesadas causadas por

María Isabel, entre el 21 de mayo y el 5 de julio de 2014 (págs. 39-46, 60-67 arch. 1; subcarp. 16 y 17 C01).

Ahora, para dilucidar lo atinente a la calidad de beneficiaria de la demandante Yolanda María Betancourt de Upegui, conforme dan cuenta los registros civiles de nacimiento y defunción aportados, se observa que tanto ella como María Isabel (QEPD) son hijas de Ligia Estrada de Betancourt y Jaime Betancourt Arango, quienes además fallecieron el 10 de julio de 2003 y el 17 de junio de 1983, respectivamente (págs. 18-20 arch 1, subcarp. 17 C01).

Adicionalmente, no existe medio probatorio del que se desprenda que la causante tenía cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho a la prestación que dejó causada, pues incluso se aportó el testamento otorgado por la causante mediante EP n.º 1163 protocolizada en la Notaría 1ª del Círculo de Itagüí, Antioquia, en el que declaró que la única heredera de todos sus bienes muebles e inmuebles era su hermana Yolanda María, a quien en efecto, se le adjudicó tal patrimonio mediante EP n.º 532 del 18 de marzo de 2015 elevada ante la misma Notaría, y en tal virtud, a ella se le pagaron las prestaciones sociales legales y extralegales que quedaron pendientes en favor de María Isabel como Docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (págs.. 30-37, 69-71 arch. 1 C01).

De manera que, como aquí quedó claro que la demandante tiene una PCL del 52.61% estructurada al 20 de junio de 2014, es decir, con anterioridad al fallecimiento de su hermana María Isabel, cumple con la condición de hermana en situación de discapacidad de la causante, al tenor de lo dispuesto en el lit. e) del art. 47 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el art. 38 *idem*, es en principio una potencial beneficiaria de la pensión de sobrevivientes aquí reclamada; resta entonces, ahora sí, establecer si dependía económicamente de su hermana al momento de su deceso, sin importar que hubieran convivido o no bajo el mismo hogar, pues esta no es una condición impuesta por la norma en cita.

En relación con la dependencia económica, precisa la Sala que tal requisito no excluye la existencia de otras rentas o fuentes de recursos, propios, o provenientes de otras personas, dado que el ámbito de la seguridad social supera el simple concepto de ‘subsistencia’, y ubica en principal lugar el

carácter decoroso de una vida digna que continúe las condiciones básicas ofrecidas por el causante (CC C-066-2016):

« 60. De lo anterior se resalta que para esta Corporación la dependencia económica ha sido comprendida como: (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto-proporcionarse o mantener su subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas.

(...)74. Así las cosas, al mantener la condición de acceso de “dependencia económica” con la cualificación de “sin ingresos adicionales”, naturalmente proscribe la posibilidad de que una persona en condiciones de discapacidad subordinada al causante, pueda procurarse algún medio de sustento, acceder a un trabajo o ejercer determinada profesión u oficio. En ese sentido, la demostración de la ausencia total de ingresos, constituye una barrera de acceso para la superación personal de este grupo, siendo necesaria la adecuación de la norma en la medida que si bien se mantenga la dependencia como requisito de acceso, la misma no acentúe la discriminación, sobre todo si se tiene que en el caso de los padres, la subordinación pecuniaria es parcial, no se justifica porque en el caso de los hijos inválidos deba ser total, entre otras, siendo titulares de mejor derecho, en tanto que están en el mismo orden de prelación del cónyuge o la compañera permanente, y ante su existencia, desplazan a los padres del causante.

75. En este orden de ideas, al exigir la disposición acusada la demostración de una dependencia económica total y absoluta, *“esto es, que no tienen ingresos adicionales”* establece un supuesto de hecho que termina por hacer nugatoria la posibilidad que tienen los hijos inválidos del causante de acceder a la pensión de sobrevivientes, sacrificando derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital, el respeto a la dignidad humana y la seguridad social de sujetos de especial protección constitucional.

(...) 78. Como consecuencia de dicho trato discriminatorio, se genera una lesión a la dignidad humana de este grupo de especial protección, al imponer una barrera de acceso en las actividades de superación, impidiendo el ejercicio de alguna actividad remunerativa, so pena de perder el beneficio de acceso a la prestación económica. De igual modo, se conculcan sus derechos a la seguridad social y mínimo vital.

(...) 80. Esta Corporación constató que es legítimo establecer condiciones de acceso para los beneficios pensionales, en tanto que la propia Constitución autoriza al Legislador para configurar el Sistema Pensional, y definir los requisitos para su reconocimiento. En el presente caso, la potestad legislativa es una razón suficiente para declarar la constitucionalidad de los apartes *“si dependían económicamente de éste”* atinentes a los hermanos inválidos del causante, contenidos en el literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y, *“si dependían económicamente del causante,”* refiriéndose a los hijos inválidos de que trata el literal c) del artículo antes mencionado. En tanto que resulta necesario y adecuado que el constituyente derivado imponga ciertos requisitos de acceso, tales como la dependencia económica de quienes integraban el núcleo familiar en protección de los beneficiarios de posibles actores ajenos a los familiares más cercanos -*Supra* numerales 50 y 51-. Adicionalmente, se constató que la norma no proporciona un trato diferente a los hermanos inválidos, en tanto que a los padres se les exige el mismo grado de subordinación económica.

81. No siendo lo mismo, para el caso del enunciado *“esto es, que no tienen ingresos adicionales,”* del literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues si bien, la libertad de configuración es amplia, encuentra su límite en la vulneración de derechos fundamentales, mandatos constitucionales expresados con claridad, o regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas. Dentro de los cuales se comprobó, en aplicación del precedente sentado en la sentencia C-111 de 2006 -*Supra* numeral 62-, que la medida legislativa en el caso de los hijos en situación de discapacidad, afecta el goce y disfrute de varios derechos fundamentales, tales como el mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social, garantizados a través de la pensión de sobrevivientes.

82. Adicionalmente, la condición de acceso de dependencia económica con la cualificación de *“sin ingresos adicionales”*, va en contravía con la posibilidad de que una persona en condiciones de discapacidad subordinada al causante, pueda procurarse algún medio de sustento, acceder a un trabajo o ejercer determinada profesión u oficio. Por lo que, la demostración de la ausencia total de ingresos, constituye una barrera de

acceso para la superación personal de este grupo de personas, siendo necesaria la adecuación de la norma en la medida que si bien se mantenga la dependencia como requisito de ingreso, la misma no acentúe la discriminación, sobre todo si se tiene que en el caso de los padres, la subordinación pecuniaria es parcial, no se justifica porque en el caso de los hijos inválidos deba ser total, entre otras, siendo titulares de mejor derecho, en tanto que están en el mismo orden de prelación del cónyuge o la compañera permanente, y ante su existencia, desplazan a los padres del causante.».

Lo anterior sin olvidar por supuesto que, la dependencia económica, tampoco puede ser entendida como cualquier contribución o simple colaboración que se le otorgue a los familiares, sino aquella que implique efectivamente subordinación de tipo económico.

Sin embargo, tal y como lo advirtió la *a quo*, la exigencia relativa a la dependencia económica no se encuentra satisfecha por lo siguiente:

- a.** A Yolanda María se le reconoció una sustitución pensional por parte del extinto ISS mediante Resolución n° 02427 de 1989 con ocasión del fallecimiento de su esposo Alfonso Upegui Ortiz, en cuantía de 1 SMLMV de la época (\$32.560 págs.. 21, 22 arch 1 C01).
- b.** Registra como empleadora de Sor Belén Barrera Zapata ante la AFP Protección SA, y ha efectuado aportes en favor de esta última de manera ininterrumpida desde febrero de 2008 a febrero de 2021, según la historia laboral expedida por dicho fondo el 17 de marzo de 2021 (págs.. 128-136 arch. 1 C01).
- c.** Afilió a Ana de Dios Bustamante Ceballos como su trabajadora ante el extinto ISS como antiguo administrador del sistema general de pensiones el 19 de enero de 2012 (pág. 137 arch. 1 C01).
- d.** También registra como empleadora de Ana de Dios, ante la EPS Sura, en la medida en que esa entidad le dirigió comunicación el 1° de marzo de 2014 en su calidad de empleadora para informarle acerca del traslado aceptado de la mencionada trabajadora, proveniente de la EPS Comfenalco en liquidación (pág. 138 arch. 1 C01).

Aunado a lo anterior, en el interrogatorio de parte, Yolanda María sostuvo que toda la vida recibió un poco de ayuda de su hermana, quien a pesar de que vivía en su propia casa, desde el 2012 se trasladó a vivir con ella en su casa de habitación como consecuencia del estado grave de salud que le aquejaba a su hermana y debido a ello le colaboraba para el pago de la empleada del servicio doméstico, sacaba parte de los servicios públicos y parte la alimentación; dijo que la casa donde han vivido, es de propiedad de uno de sus hijos, quien en la

actualidad asume parte de los gastos del hogar, pero se quedó sin empleo desde el año 2020, y con lo que recibió de liquidación asume parte de las obligaciones del hogar, mientras que su hijo que vive en Estados Unidos, le paga la medicina prepagada, parte de los servicios, el impuesto predial y la empleada doméstica, más otras cosas y el otro hijo la ayuda con la alimentación; agregó que continúa recibiendo la pensión mínima como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge y que actualmente un hermano le ayuda con algo y el otro hijo, es decir, el dueño de la casa

Por su parte, Sor Belén Barrera Zapata, testigo de la parte demandante, admitió que trabaja en la actualidad con Yolanda María como empleada del servicio doméstico que desde el año 2008, dijo que la demandante tuvo 3 hijos, de los cuales aún viven 2; para la época del fallecimiento de María Isabel, Yolanda María vivía únicamente con uno de sus hijos y la causante señora María Isabel Betancourt, la cual se fue a vivir allá 5 ó 6 meses antes de haberse producido su deceso en el año 2014; después de esa data Yolanda María ha tenido una difícil situación económica, ya que el hijo con el que siempre ha vivido cuyo nombre es Miguel Jaime se quedó sin empleo; dijo que María Isabel le ayudaba a su hermana y sobrino para el sostenimiento del hogar; el hijo de Yolanda se encargaba de la comida, los gastos de la casa y pago de servicios y le daba para el arreglo de las uñas, la cepillada del pelo, mientras que su otro hijo vive en Estados Unidos y también le ayuda a su madre, con la medicina prepagada; relató que su salario actual como empleada del servicio doméstico se lo paga Miguel Jaime, el hijo de la demandante.

Declaró igualmente Miguel Jaime Upegui Betancourt, el hijo de la demandante, quien dijo que se encuentra desempleado desde el año 2020, que su tía María Isabel estuvo viviendo con ella durante los últimos 5 años de su vida, porque fue cuando estuvo más crítica su enfermedad, que luego le ocasionó la muerte en el año 2014; con posterioridad a esa fecha, la situación económica de su señora madre se ha visto desmejorada, ya que su tía María Isabel le ayudaba para el sostenimiento del hogar; dijo que en la actualidad tiene como renta el alquiler de una propiedad y ese dinero lo emplea también para el sostenimiento del hogar, es decir, de la casa de habitación donde vive con su señora madre aquí demandante.



De manera que, ante estas circunstancias y algunas contradicciones que se pudo observar entre las declaraciones recibidas y las manifestaciones efectuadas por la misma demandante en su interrogatorio de parte, no es posible derivar la dependencia económica necesaria de Yolanda María, para tener la calidad de beneficiaria de la sustitución de la pensión de invalidez, con ocasión de la muerte de su hermana María Isabel, conforme a lo establecido en el lit. e) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, pues aunque esta Sala, no desconoce que el mismo no excluye la existencia de otras rentas o fuentes de recursos, propios, o provenientes de otras personas, siempre y cuando no los convierta en autosuficientes económicamente, la dependencia económica tampoco puede ser entendida como cualquier contribución o simple colaboración que se le otorgue a los familiares (CSJ SL 8 jul. 2009 rad. 35784 y CSJ SL2877-2019), toda vez que esa no es la finalidad prevista en el sistema de seguridad social, cuyo propósito es servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas, razón por la cual, es necesario establecer si se verifica una verdadera subordinación económica respecto del hermano que fallece.

Así las cosas, con base en el material probatorio analizado de manera conjunta, al tenor de lo dispuesto en el art. 61 del CPTSS, el aporte proporcionado por la causante al hogar de la demandante para la época de los hechos, resultaba insuficiente para predicar la dependencia económica real y efectiva de esta con respecto de la pensionada fallecida; por el contrario, se establece que aquella dependía económicamente de su propia pensión y de sus hijos; en consecuencia, solo en este aspecto se **confirmará** el numeral **primero** absolutorio de la sentencia consultada.

Sin costas en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE** el numeral **primero** de la sentencia consultada proferida el 19 de mayo de 2022 por el Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto que absolvió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para en su lugar **declarar** que para todos los efectos legales a que haya lugar, Yolanda María Betancourt de Upegui sufre de una pérdida de capacidad laboral en un porcentaje del 52.61% estructurada al 20 de junio de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO: CONFIRMAR LA ABSOLUCIÓN** impartida el numeral **primero** de la sentencia consultada frente a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, **pero** por las razones anteriormente expuestas, en el entendido de que la demandante no acreditó el requisito de la dependencia económica en el lit. e) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, respecto de su hermana María Isabel Betancur [sic] Estrada (QEPD), conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Sin costas en el grado jurisdiccional de consulta.

**CUARTO:** Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

Magistrada ponente

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

  
**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**  
Magistrado

(\*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

[https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/Ev9msivz93ZMpfROkzcWraQB20qgdxJi0ajSShTKAc9tfQ?e=vaixZW](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Ev9msivz93ZMpfROkzcWraQB20qgdxJi0ajSShTKAc9tfQ?e=vaixZW)

**Firmado Por:**  
**Luz Patricia Quintero Calle**  
**Magistrada**  
**Sala 017 Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ce6e249737427ec1fc620773a56d23576d77bf6ad27b0f42402be2079ae855e9**

Documento generado en 23/04/2024 04:37:19 p. m.

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**